

DECLARACIÓN INICIAL DE LAS RAZONES E INFORME PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE REGLAMENTACIÓN
DE PESTICIDAS

Título 3. Código de Reglamentos de California
Adoptar la Sección 6128 y Modificar la Sección 6130
Referentes a Respuestas para la Ejecución de Leyes

Esta es la Declaración Inicial de las Razones requerida por la sección 11346.2 del Código de Gobierno y por el informe público especificado en la sección 6110 del Título 3 del Código de Reglamentos de California (3 CCR). La Sección 6110 cumple con los requisitos del Título 14 de la sección 15252 del CCR y de la sección 21080.5 del Código de Recursos Públicos referentes a programas reglamentarios estatales certificados según el Acta de Calidad del Medio Ambiente de California.

SUMARIO DE LA ACCIÓN PROPUESTA/ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE
REGLAMENTACIÓN DE PESTICIDAS QUE SERÁN AFECTADAS

El Departamento de Reglamentación de Pesticidas (DPR, por su sigla en inglés) propone adoptar la sección 6128 y modificar la sección 6130 del Título 3 del CCR. Las actividades del programa de reglamentación de pesticidas que se verán afectadas por la propuesta son aquellas referentes a la ejecución de las reglamentaciones sobre pesticidas. En resumen, la acción propuesta especificaría cuáles son las respuestas apropiadas para la ejecución de leyes que deberá tomar el comisionado de agricultura del condado (CAC, por sus siglas en inglés) cada vez que se cometa una infracción.

PROPÓSITO ESPECÍFICO Y BASE FÁCTICA

La ley federal y estatal ha ordenado al DPR que proteja la salud pública y el medio ambiente reglamentando la venta y uso de pesticidas y fomentando el manejo de plagas con riesgo reducido. La estricta supervisión del DPR incluye una exhaustiva evaluación científica del producto y de su registro; y licencias y certificación de los aplicadores comerciales, comerciantes y asesores en todo el Estado de California. Los CACs comparten la autoridad con el DPR en la ejecución de las leyes y reglamentos de pesticidas. La ejecución de leyes en el campo, a nivel local, la realizarán los CACs bajo supervisión del DPR. El objetivo de los programas de ejecución de las leyes es proteger la salud pública, la propiedad, los manipuladores de pesticidas, los trabajadores del campo y el medio ambiente en el Estado de California.

La ejecución constante de las leyes ambientales de California en todo el estado es fundamental para la protección de las personas, la propiedad y el medio ambiente. No obstante, la administración local del programa puede naturalmente dar como resultado decisiones y respuestas variables en la ejecución de las leyes. Al haber encontrado que la ejecución de las leyes y reglamentos de protección ambiental por parte de los CACs no es constante, el DPR y la Asociación de Comisionados y Selladores Agrícolas de California han trabajado en conjunto para desarrollar y adoptar a título de guía una Política Sobre Respuestas a la Ejecución de las Leyes

(ERP, sigla en inglés) 2005. La ERP está destinada a fortalecer la ejecución de las leyes ambientales y mejorar la constancia en las respuestas a la ejecución utilizadas por los CACs en todo el estado cuando actúan en respuesta a infracciones en el uso de pesticidas. Al crear un sistema de clasificación de infracciones y un procedimiento de respuestas para la ejecución de las leyes, los CACs de todo el estado de California pueden seguir las mismas pautas

Durante las sesiones legislativas de 2005, la Senadora Martha Escutia advirtió la necesidad de tener una estrategia constante y oportuna para la ejecución de las leyes de pesticidas, e introdujo una enmienda al Proyecto de Ley del Senado (SB, sigla en inglés) 455 que, en parte, exigió al DPR que agregase las políticas de la ERP a las reglamentaciones. El 7 de octubre de 2005, el Gobernador Schwarzenegger vetó el Proyecto SB 455. No obstante, en el mensaje de veto del Gobernador, se le ordenó al DPR iniciar el proceso para agregar la ERP 2005 a las reglamentaciones de manera expeditiva. Por lo tanto, el DPR propone adoptar estipulaciones específicas que sean cumplidas por los CACs al determinar la respuesta de ejecución de las leyes apropiada, cuando ocurra una violación de los reglamentos.

La sección 6128 que ha sido propuesta especificaría las respuestas de ejecución apropiadas que deberán utilizar los CACs en casos de infracciones específicas en situaciones específicas. Las respuestas de ejecución que se proponen son coherentes con las normas establecidas en la política ERP 2005. La subsección (a) que se propone, requiere que los CACs cumplan con lo estipulado en esta sección.

La subsección (b) propuesta contiene definiciones de los términos “acción de acatamiento/compliance action”, “informe de decisión/decision report” y “acción de ejecución de leyes/enforcement action”. Estas definiciones son necesarias para aclarar la acción reglamentaria de esta sección propuesta.

Las acciones reglamentarias son más eficaces cuando el reglamentador utiliza herramientas factibles de producir un cambio positivo de comportamiento. La gravedad y frecuencia de las infracciones son los factores clave que determinan la clase de respuesta que deberá aplicar un reglamentador para ejecutar las leyes. Las respuestas de carácter progresivo para la ejecución de leyes utilizan una gama de recursos cuyo grado varía entre una acción de acatamiento y una acción administrativa, civil, o penal. La subsección (c) propuesta establece una estructura de respuestas diseñadas para ser utilizadas en función al tipo de “clase” de infracción indicada en la sección 6130. La sección 6130 identifica tres clases de infracciones: A, B, y C. Estas clases de infracciones se basan en la gravedad de las mismas y en el posible daño que ocasionen a la salud pública, a la seguridad del trabajador y al medio ambiente. Los CACs responderían a cada infracción con una respuesta de ejecución que sea adecuada a esa clase de infracción.

La respuesta para la ejecución de leyes en el caso de una infracción de Clase A sería una de las siguientes:

- una derivación formal al Fiscal de Distrito/District Attorney, al Abogado Municipal/City Attorney o al Fiscal de Circuito/Circuit Prosecutor, o una derivación al Director para una acción a nivel estatal sobre licenciamiento, o una acción del Procurador General/Attorney General; o
- una acción de ejecución de leyes.

La respuesta para la ejecución de leyes en el caso de una infracción de Clase B sería una de las siguientes:

- una derivación formal al Fiscal de Distrito, al Abogado Municipal o al Fiscal de Circuito, o una derivación al Director para una acción a nivel estatal sobre licenciamiento, o una acción del Procurador General; o
- una acción de ejecución de leyes; o
- una acción de acatamiento con un informe de decisión, siempre que no haya habido una acción de acatamiento por una infracción de la misma clase dentro de los dos años anteriores a la presunta infracción actual. En algunos casos, además de la respuesta a la ejecución de leyes especificada en la sección 6128(c)(2)(A) o (B) se podrá tomar una acción de acatamiento, en cuyo caso no se requerirá un informe de decisión.

La respuesta para la ejecución de leyes en el caso de una infracción de Clase C sería una de las siguientes:

- una acción de ejecución de leyes; o
- una acción de acatamiento con un informe de decisión cuando haya habido una acción de acatamiento en respuesta a una infracción de la misma clase dentro de los dos años anteriores a la presunta infracción actual; o
- una acción de acatamiento sin un informe de decisión, siempre que no haya habido una acción de acatamiento por una infracción de la misma clase dentro de los dos años anteriores a la presunta infracción actual.

Se cree que en algunas situaciones donde ha ocurrido una infracción de Clase B o Clase C, es posible cumplir con el acatamiento sin necesidad de ejercer ninguna acción de ejecución. Las respuestas que se proponen para la ejecución de leyes en estas clases de infracciones permiten que un CAC determine en situaciones específicas si una acción de acatamiento es lo más apropiado. No obstante, en ciertos casos en que se considere que una acción de acatamiento es la respuesta apropiada, el CAC deberá presentar al Director un informe de decisión, para obtener acuerdo. El informe de decisión permite al DPR realizar un monitoreo y garantizar que las infracciones iguales reciban el mismo tratamiento en todos los condados y que la ejecución de leyes se aplique en forma coherente a nivel estatal.

La subsección (d) propuesta especifica la información que deberá ser presentada al Director cuando se requiera un informe de decisión. El informe de decisión deberá presentarse dentro de los 30 días de la fecha prevista para la acción de acatamiento, a fin de obtener acuerdo. Si no se obtuviera el acuerdo del Director, se deberá tomar una acción de ejecución. Además, los CACs deberán conservar una copia del informe de decisión durante dos años.

La subsección (e) propuesta requiere que los CACs otorguen oportunidad al Fiscal de Distrito, al Abogado Municipal o al Fiscal de Circuito de participar en una investigación prioritaria, según lo definido en el Convenio de Cooperación del 2005, o modificaciones subsecuentes del mismo, entre el DPR, la Asociación de Comisionados y Verificadores Agrícolas, y la Región IX de la Agencia de Protección Ambiental Federal, y/o presentar una acción civil o penal si se contempla tomar una acción distinta a una acción de acatamiento. Esto dará oportunidad al Fiscal de

Distrito, al Abogado Municipal o al Fiscal de Circuito de participar en la etapa temprana de una investigación.

Además, el DPR propone modificar la sección 6130 para aclarar qué es lo que determina que una infracción se considere “reincidente”. La subsección (a)(2) propuesta contribuye a aclarar la definición de infracción “reincidente” expresando simplemente que si una infracción ocurre en el mismo condado y dentro de los dos años de otra infracción de la misma clase que fuera sancionada con una penalización civil, debe ser clasificada como infracción “reincidente” .

La subsección 6130(a) (1) propuesta hace un cambio de referencias de "sección" a "artículo".

CONSULTAS CON OTRAS AGENCIAS

De acuerdo con lo requerido por la sección 12981 del FAC, el DPR consultó a la Oficina de Evaluación de Riesgos a la Salud Ambiental (Office of Environmental Health Hazard Assessment) durante la elaboración del texto de las reglamentaciones propuestas, y esta Oficina estuvo de acuerdo con el desarrollo de las reglamentaciones. El DPR también consultó al Departamento de Relaciones Industriales (Department of Industrial Relations) y a la Universidad de California en Davis.

El DPR consultó también al Departamento de Alimentos y Agricultura de California (California Department of Food and Agriculture) durante el desarrollo del texto de las reglamentaciones propuestas, como lo especifica la sección 11454 del FAC y el Memorando de Entendimiento del 6 de febrero de 1992 elaborado de acuerdo con la sección 11454.2.

Además, el DPR consultó a los CACs durante la elaboración de las reglamentaciones propuestas. Las políticas ERP, base de las reglamentaciones propuestas, fue aprobada por la Asociación de Comisionados y Selladores Agrícolas de California el 18 de agosto de 2005.

El archivo de formulación de reglas contiene copias de la correspondencia intercambiada con estas agencias.

ALTERNATIVAS A LA ACCIÓN REGLAMENTARIA QUE SE PROPONE

El DPR no ha identificado ninguna alternativa viable a la acción reglamentaria propuesta que sirviera para atenuar posibles impactos adversos, incluyendo posibles impactos en las pequeñas empresas, e invita a presentar alternativas sugeridas.

El 24 de Agosto de 2005, una coalición de 17 importantes asociaciones agrícolas solicitó al DPR que agregara su nueva política ERP a las reglamentaciones formales que tienen fuerza de ley.

ESFUERZOS PARA EVITAR UNA DUPLICACIÓN INNECESARIA DE LAS REGLAMENTACIONES FEDERALES

La acción reglamentaria propuesta no duplicará ni estará en conflicto con ninguna reglamentación contenida en el Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations).

DOCUMENTOS RESPALDATORIOS

1. Enforcement Response Policy, Department of Pesticide Regulation and County Agricultural Commissioners, August 2005.
 2. Enforcement Letter 2005-025, Enforcement Response Policy.
 3. Cooperative Agreement Between the U.S. Environmental Protection Agency, Region IX, the California Department of Pesticide Regulation, and the California Agricultural Commissioners and Sealers Association, April 2005.
-